

a
Nº 86

Alerta laboral



Publicación del Centro de Estudios para
el Desarrollo Laboral y Agrario - CEDLA
Año IX - La Paz, diciembre de 2019

cedla
centro de estudios para el desarrollo
laboral y agrario

CONOCIMIENTO AL SERVICIO DE LOS TRABAJADORES



La herencia del MAS: Rentismo, subsidios y pobreza multidimensional

3

86% de los campesinos y colonos
son pobres

6

La pobreza en la clase obrera
agrícola y no agrícola

4

Trabajadores por cuenta propia
son casi 1,5 millones de personas

8

Desigualdad y negación de
derechos



EL MAS Y LA AGENDA PROCAPITALISTA

La paradoja histórica de que el gobierno del primer presidente indígena haya gobernado en contra de los indígenas, se refleja en el hecho de que Evo Morales priorizó con sus políticas la acumulación de ganancias capitalistas y la captura para el fisco de una parte de la renta proveniente de la explotación de los recursos naturales, situación que requería ir en contra de los pueblos indígenas, afectándoles en innumerables ocasiones, en muchas de las cuales las decisiones gubernamentales fueron acompañadas de una feroz represión.

Algunos ejemplos de esa política, son la decisión de construir la carretera por medio del Tipnis para favorecer a los empresarios ganaderos, a los productores de coca y al avance de los planes IIRSA; la entrega de tierras fiscales -incluso a costa de producir un desastre ecológico en la Chiquitania- para ampliar la frontera agrícola con el fin de producir soya y caña de azúcar para impulsar la producción de biocombustibles o para crianza de ganado vacuno destinado a la exportación de carne a China, ambos negocios en manos de los empresarios agroindustriales; la intención de construir gigantescas represas hidroeléctricas, como las de El Bala, Chepete y otras en la frontera con Brasil, que afectarían territorios indígenas y a pesar de las evidencias sobre su inviabilidad técnica y económica; la decisión de facilitar la exploración petrolera en áreas reservadas y territorios indígenas como la reserva nacional de Tariquía a cargo de Petrobras o la Cuenca Madre de Dios; el impulso a la minería del oro en el norte amazónico de La Paz, cuyas concesiones pertenecen a cooperativistas, pero que se explotan en asociación con capitales chinos y colombianos.

El modelo económico prevaleciente durante el gobierno del MAS se caracterizó, además de su orientación indiscutiblemente procapitalista reflejada en la permanencia del dominio

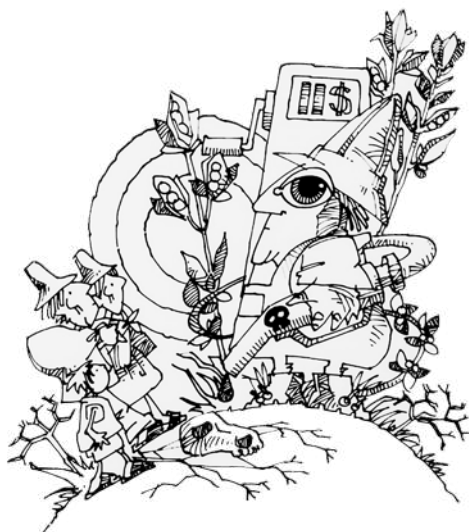
económico de las empresas transnacionales, por la extrema corrupción y una megalomanía ineficiente, resumidas en el fracaso de la denominada “industrialización”: plantas de separación de gas natural y de urea que producen muy por debajo de su capacidad y que no tienen mercados para su realización; retraso y reorientación del proyecto de industrialización del litio, debido a la incapacidad demostrada por la empresa estatal para la producción industrial de carbonato de litio, después de una década de experimentación; disminución de la producción metalúrgica de minerales metálicos, explicada por el fracaso reiterado de la implementación de la fundición de plomo/plata de Karachipampa y la ausencia de un proyecto serio para la construcción de una planta de refinación de zinc, etc.

Consecuentemente, la administración fiscal de la enorme renta obtenida gracias a los elevados precios del gas natural y los minerales y de la explotación acelerada de sus reservas por empresas transnacionales, se caracterizó por la inexistencia de planificación seria, por la presencia extendida de hechos de corrupción y por la ineficiencia en la implementación de los proyectos estatales.

La salida de Evo Morales no fue producto de un golpe de Estado, sino la consecuencia de la acumulación del enojo y descontento en gran parte de la población —principalmente citadina— que se movilizó en contra de los impactos de largo plazo provocados por su modelo rentista, en contra del desconocimiento y violación constantes de los derechos civiles, sociales y laborales, y en contra del creciente autoritarismo del caudillo ahora en el exilio.

Javier Gómez
DIRECTOR EJECUTIVO
CEDLA

Café tinto



Síguenos en:



cedlabolivia



@cedlabo



cedla



cedla



69775464

Mira también el
Observatorio Boliviano
de Empleo y Seguridad Social
<http://cedla.org/obess>

Visítanos

www.cedla.org

Alerta laboral

Director: Javier Gómez Aguilar

Escribe: Silvia Escobar

Producción editorial:
Unidad de Comunicación y
Gestión de Información - CEDLA

Coordinación: Rolando Carvajal

Diseño: Rudy Guarachi Cota

Ilustraciones: Gonzalo Llanos

Fotografía de tapa e interiores: Bolivia.com, El
Deber, Inmediaciones, Opinión, RTP, Urgentebo,
RTP y Flirckr.

Achumani, Calle 11, N° 100 entre Av. García
Lanza y Av. Alexander
Tel. 279-4740 / 279-9848
E-mail: info@cedla.org
La Paz - Bolivia

SON EL 25% DE LOS TRABAJADORES Y SUMAN 1,3 MILLONES DE PERSONAS

El 86% de los campesinos y colonos bolivianos es pobre multidimensional

El aporte de los campesinos a la producción de alimentos tiende a disminuir, de manera que hacia 2013 solo participaban con el 10% de la producción agrícola nacional.

Una gran masa de campesinos pobres es el resultado general de las políticas agropecuarias que privilegian el desarrollo de la producción de la gran empresa agropecuaria en el oriente del país, y han profundizado las tendencias a la diferenciación social de los productores y a la parcelación de la tierra en el altiplano y los valles, donde se concentran las unidades productivas campesinas.

La investigación reciente sobre la pobreza multidimensional del CEDLA confirma la profundización de la desigualdad de acceso a la tierra, pues las unidades productivas capitalistas tienen 83,6 hectáreas en promedio, en tanto que las unidades productivas campesinas solo tienen 10 hectáreas en promedio y, el 25% produce con superficies menores a una hectárea.

El aporte de los campesinos a la producción de alimentos tiende a disminuir, de manera que hacia 2013 solo participaban con el 10% de la producción agrícola nacional.

Es más, los campesinos asentados en los departamentos con mayores índices de pobreza rural –Potosí, La Paz y Chuquisaca– solo aportaron con la mitad del reducido

volumen registrado aquel año, precisa el estudio.

Todo ello tuvo lugar en el contexto de una competencia de los alimentos importados a bajo precio, agravada por la política de apertura comercial y la ausencia de políticas e inversiones suficientes para revertir los factores que inciden en su baja productividad.

“A medida que disminuye la producción y la capacidad para sustentar sus medios de vida, una gran cantidad de campesinos ya no se presentan en el mercado como oferentes de bienes agrícolas, sino fundamentalmente como vendedores de fuerza de trabajo, dentro o fuera de sus lugares de residencia habitual”, señala el estudio.

Es decir, son campesinos semi-proletarizados, cuyos ingresos familiares ya no dependen principalmente de la venta de sus productos, sino de la venta de su fuerza de trabajo.

Sin embargo, en el actual panorama socioeconómico y político, ni siquiera los procesos de migración, doble residencia y pluriactividad, en los cuales están inmersos, contribuyen a reducir los niveles de pobreza de este grupo social, que sigue enfrentando enormes déficits en las condiciones para ejercer

sus derechos a salud, educación, vivienda y servicios básicos mejorados.

Déficits que también afectan sus posibilidades de movilización y acción colectiva.

Así, el derecho a la participación social y política de este grupo de campesinos y colonos, se ha visto cada vez más limitado, agravada por el autoritarismo de sus dirigentes sindicales que trabajan para sus propios intereses y beneficios particulares en el marco de una relación prebendal con el gobierno.



SON EL 30% DE LOS TRABAJADORES: 1,5 MILLONES DE PERSONAS

La pobreza multidimensional afecta al 60 % de los trabajadores por cuenta propia que se debaten entre el desempleo y la sobrevivencia

Incluso habiendo logrado consolidar sus actividades y valorar el hecho de tener un propio negocio, en muchos casos su trabajo sólo les sirve para sobrevivir, y transitan con frecuencia hacia una situación de pobreza.

Entendido como el desarrollo de iniciativas generadoras de ingresos seguros o como una situación de sobrevivencia a fin de evitar el desempleo, el trabajo por cuenta propia se

extiende a casi un tercio de los trabajadores y la pobreza multidimensional afecta a seis de cada diez miembros de este grupo.

En contextos de desaceleración económica como el

actual, es común que un mayor número de personas que permanecían inactivas o desempleadas se movilicen a la actividad económica para aportar al ingreso familiar. “También es frecuente que los empleadores de pequeñas unidades económicas que pierden mercados, transiten hacia el trabajo independiente para mantenerse ocupados”, señala un análisis del CEDLA.

Desde cualquier vertiente, la presencia de un gran volumen de personas que trabajan solas o con el apoyo de otros miembros de su hogar, sin contratar personal asalariado, añade el estudio, es un rasgo estructural de nuestras ciudades, en ausencia de políticas de largo plazo para promover la diversificación económica y la creación de empleo productivo.

Los trabajadores independientes predominan en el comercio, los servicios personales menos calificados y el transporte público.

“Son un grupo que también se caracteriza por la diferenciación social, pero la mayoría son pobres por ingresos”,



pues al menos cuatro de cada 10 obtiene ingresos mensuales por debajo del salario mínimo nacional y el 59% no alcanza a cubrir con lo que gana el costo de una canasta familiar.

PRECARIEDAD LABORAL Y SOBREVIVENCIA

La inseguridad en los ingresos, la competencia entre sí y las variaciones de la demanda por sus bienes y servicios, marcan cada vez más la precariedad en la que transcurre la vida cotidiana de la mayor parte de los trabajadores por cuenta propia. La razón es que los ingresos bajos y fluctuantes que generan son la fuente principal —sino la única— de sustento de sus familias.

Incluso habiendo logrado consolidar sus actividades y valorar el hecho de tener un propio negocio, en muchos casos su

trabajo sólo les sirve para sobrevivir, y transitan con frecuencia hacia una situación de pobreza.

Entre otros indicadores sociales, este grupo presenta un rezago escolar superior al promedio y enfrenta enormes restricciones para ejercer sus derechos a la salud, a la protección del sistema de pensiones, a una vivienda adecuada y a los servicios básicos mejorados.

En realidad, la ausencia de políticas públicas en beneficio de este grupo lleva a que su acceso a esas fuentes de bienestar dependa de un mercado altamente especulativo, sin que la mediación estatal ponga freno a las condiciones mercantiles que agravan las desigualdades y exclusiones que impiden el ejercicio de sus derechos fundamentales.

“Si bien suelen asociarse o afiliarse a alguna organización

de sus gremios, los trabajadores independientes no participan activamente en espacios públicos y gremiales para hacer escuchar sus necesidades y demandas”, subraya la investigación. En cambio, son presa de dirigencias que los movilizan buscando beneficios particulares o de grupo.

Por otro lado, ninguna institución se hace cargo de los riesgos que acompañan su permanencia por largas jornadas en los mercados y las calles de las ciudades. “Por eso son uno de los grupos sociales que reporta mayores eventos de inseguridad física y también de inseguridad ciudadana en los lugares donde trabajan y donde viven”.

Todos estos factores contribuyen al persistente empobrecimiento de estos trabajadores, concluye el estudio.



SON EL 14% DE LOS TRABAJADORES, CASI 715 MIL BOLIVIANOS

En la clase obrera agrícola y no agrícola, el 63% es pobre multidimensional

Los trabajadores agrícolas estacionales ni siquiera son sujetos de la legislación laboral, y sus luchas de larga data para ser reconocidos en su ámbito de aplicación no han tenido eco en las instancias gubernamentales.

La clase obrera ha venido disminuyendo aceleradamente durante los últimos 30 años, desde el 22% hasta el 14% de la fuerza laboral, como resultado de la insuficiencia de las políticas sectoriales de diversificación productiva e industrialización, el retorno al extractivismo y su profundización, sostiene la investigación del CEDLA.

Los obreros de la manufactura, la construcción, la minería

y la agropecuaria, en ese orden, componen este grupo social, que suma unos 715 mil proletarios, entre mujeres y hombres, de los cuales el 63% es pobre multidimensional.

La mayor parte de los obreros está expuesta a condiciones laborales degradadas en términos de estabilidad laboral, salarios, jornadas de trabajo y beneficios sociales, lo que los ubica entre los trabajadores con

mayores índices de precariedad laboral y un alto grado de explotación de su fuerza de trabajo.

Con independencia del sector del mercado de trabajo, la competitividad y la ganancia empresarial en el país siguen basadas en la reducción de costos laborales, advierte el estudio, “mediante mecanismos contractuales que limitan el ejercicio de los derechos laborales, la libertad de asociación y la acción sindical”.

Todo esto sucede bajo la “mirada indiferente del Estado” que incumple su rol en la fiscalización y cumplimiento de la legislación vigente.

En los últimos años, la sobreexplotación de obreros bolivianos por empresas constructoras chinas, entre otros casos, ha sido ampliamente reportada por el CEDLA, sin embargo, la subordinación estatal a los intereses extranjeros hace que estas acciones no sean pasibles a las sanciones y a la reparación establecidas por ley.

Cotidianamente, se conocen otros casos con diversos grados de violación de derechos laborales y sociales en empresas productivas de las



ciudades y el campo, donde destacan las mineras, manufactureras, agropecuarias y forestales.

Trabajando sin derechos: flexibilidad laboral

La contratación por tiempo determinado, por obra o destajo y la subcontratación, son los mecanismos a través de los cuales se afectan los derechos y las condiciones laborales de más de la mitad de los obreros (52%), trasladando sobre sus espaldas las contingencias vinculadas con la salud, los riesgos profesionales y la jubilación, afirma igualmente el estudio del CEDLA.

Los trabajadores agrícolas estacionales, ni siquiera son sujetos de la legislación laboral y sus luchas de larga data para ser reconocidos en su ámbito de aplicación no han tenido eco en las instancias gubernamentales.

Advierte que mientras el trabajo agrícola asalariado se ha extendido y diversificado, solo los zafreiros y los cosechadores de algodón están sujetos a un régimen especial, pero con frecuencia sus derechos laborales no se cumplen.

Las múltiples discriminaciones de las mujeres en el trabajo se reflejan en la situación de los derechos laborales de las obreras. Son contratadas solo para determinadas actividades y tareas, entre otras, las más rutinarias, las que demandan menores calificaciones para su desempeño o las que pueden tercerizarse, llegando hasta el trabajo a domicilio.

De esa manera, hoy igual que antes, las obreras están sujetas a mayor explotación laboral, por su inestabilidad en el trabajo, por sus jornadas extensas y bajos salarios y, por su exclusión

del ejercicio de sus derechos a la salud y a la jubilación.

Falta de participación, poder y voz

En un escenario de disminución de las oportunidades de empleo, estos procesos, señala el estudio sobre pobreza multidimensional, agravan la competencia entre los trabajadores y su fragmentación, afectando todavía más sus posibilidades de organización y articulación para la acción colectiva en defensa de sus derechos laborales.

Toda vez que las dirigencias de la COB y las organizaciones sectoriales se han aliado con el gobierno en contra de los

intereses de la clase obrera, la falta de representación, poder y voz, es otra condición que empobrece a los obreros y que tiende a prolongarse en el tiempo.

El estudio sostiene que, a diferencia de otros grupos, los obreros tienen mayores restricciones para el acceso a viviendas de calidad y sobre todo a servicios básicos mejorados.

Expresa, de la misma forma, que la segregación espacial de los obreros en zonas alejadas de las ciudades, los expone a mayores índices de violencia física e inseguridad ciudadana, en comparación con otros grupos sociales.



EL 61% DE LOS BOLIVIANOS SON POBRES MULTIDIMENSIONALES DEL PORCENTAJE

Desigualdad y pobreza mul

En definitiva, comprender la pobreza como negación de los derechos humanos
acción

Los problemas de la desigualdad y la pobreza están presentes con una magnitud y profundidad persistentes en América Latina, y Bolivia no es la excepción. Sin embargo, el gobierno del MAS insistió en que uno de los logros más importantes de su gestión ha sido la reducción de la pobreza medida por ingresos, en particular la pobreza extrema. La pobreza monetaria habría disminuido desde el 60% al 35% en 13 años, por la mejora en los ingresos de los hogares, que provienen principalmente del trabajo y de otras fuentes como transferencias o bonos estatales, remesas y rentas (alquileres, utilidades, intereses, etc.). Se considera

pobres a los hogares y sus miembros que no tienen los ingresos suficientes para adquirir una canasta básica de bienes y servicios socialmente necesarios en el contexto actual y, como pobres extremos, a los que ni siquiera pueden cubrir el costo de una canasta de alimentos.

Si bien el nivel de la pobreza monetaria es menor que antes, este indicador no es suficiente para reflejar las condiciones reales de vida de la población, porque no mide la satisfacción de las necesidades en todas las esferas del bienestar, por lo cual para comprender y analizar la pobreza se debe ir más allá de los ingresos.

MÁS ALLÁ DE LOS INGRESOS

En una reciente investigación, el CEDLA ha avanzado en el conocimiento de la pobreza multidimensional en el país, basada en un enfoque de derechos humanos¹. Cada dimensión o indicador ha sido seleccionado para determinar si las personas están ejerciendo sus derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, entendiendo que la negación de derechos está en la base del empobrecimiento de la población.

Las dimensiones y subdimensiones consideradas son las siguientes: recursos, monetarios y no monetarios (bienes duraderos del hogar, escolaridad, acceso a internet); oportunidades, donde el acceso a la educación, el empleo y su calidad, la salud y las pensiones, además de la vivienda y servicios mejorados, son los derechos priorizados; poder y voz que remite a la organización y representación de intereses de los diferentes grupos sociales, en particular de los trabajadores y, seguridad humana, con relación a la seguridad alimentaria y la seguridad física de las personas.

Los resultados de esta nueva aproximación se traducen en un índice de pobreza multidimensional y su descomposición por dimensiones, lo que permite conocer la incidencia o magnitud de la pobreza multidimensional y determinar quiénes son los pobres,



1 *Desigualdades y pobreza en Bolivia: Una perspectiva multidimensional*, www.cedla.org, 2019

NSIONALES, CASI EL DOBLE EN COMPARACIÓN E DE POBRES POR INSUFICIENCIA DE INGRESOS

Multidimensional en Bolivia

os tiene particular relevancia para la construcción de agendas públicas y
es colectivas dirigidas a enfrentar sus causas desde las políticas públicas.

cómo les afecta la pobreza y
cuáles son sus principales cau-
sas estructurales.

POBREZA MULTIDIMENSIONAL

El 61% de los bolivianos son pobres multidimensionales, casi el doble en comparación del porcentaje de pobres por insuficiencia de ingresos. Esta elevada incidencia se explica principalmente por:

- La falta de acceso a recursos monetarios y de bienes durables (como bienes del hogar, el logro educativo o el acceso a internet) que influye significativamente en la incidencia de la pobreza multidimensional;
- La falta de trabajo y la pérdida de calidad de los empleos por el aumento de la explotación laboral, que lleva a la inseguridad de los ingresos personales y familiares;
- La falta de poder y voz por el debilitamiento de la organización colectiva que repercute en una baja capacidad de representación real de los trabajadores y la defensa de sus derechos;
- La limitada cobertura de los seguros de salud y de pensiones que



desprotegen a la mayoría de la población;

- La inseguridad ciudadana por el aumento de la violencia dentro y fuera del hogar (asaltos, muerte, feminicidios, trata y tráfico de personas);
- El limitado acceso a servicios básicos mejorados que afecta a la calidad de las viviendas y el medioambiente sano, entre otros.

Estos resultados expresan que no existe un ambiente propicio para el ejercicio de los derechos humanos, tanto económicos, sociales como políticos, y llaman la atención sobre el predominio del mercado sobre el Estado, que profundiza

la mercantilización de los servicios y medios de vida en el país: alimentación, salud, educación, etc. A la vez muestran dónde se origina la pobreza y su relación con las desigualdades estructurales en el ámbito de la producción, la distribución y consumo, además de las discriminaciones que afectan de manera específica a la población, ya sea por razones de género, adscripción étnica o clase social.

En definitiva comprender la pobreza como negación de los derechos humanos tiene particular relevancia para la construcción de agendas públicas y acciones colectivas dirigidas a enfrentar sus causas desde las políticas públicas.

Los Jóvenes: Derechos restringidos, futuro incierto

Una de cada cuatro personas son jóvenes menores de 30 años en todo el país. Suman más de 3 millones y el 70% vive en las ciudades, donde llegan a los 2.2 millones. Dos tercios son adolescentes y jóvenes entre 15 y 24 años.

El 63% de los jóvenes viven en situación de pobreza multidimensional, por su acceso desigual a recursos, a oportunidades, a la participación informada y a la representación colectiva y a la seguridad humana, entre otras dimensiones que los discriminan o excluyen del ejercicio de sus derechos.

LA EDUCACIÓN: UN RECURSO DESVALORIZADO

Los jóvenes de esta generación y sus familias han realizado una mayor inversión en la educación formal, pero también realizan esfuerzos para mejorar sus habilidades para el trabajo, sin embargo, solo cinco de cada 10 continúa con los estudios superiores y esta proporción se reduce a la mitad entre los pobres. En general, sus logros educativos no tienen una retribución equivalente en términos del acceso a empleos de calidad o retornos salariales acordes a sus expectativas, por la discriminación y segregación que los relega a los puestos y tareas menos calificados. En estas condiciones, la relación de la educación con el empleo juvenil reproduce y, eventualmente, amplía las inequidades sociales.

El desempleo es mayor entre los jóvenes con escolaridad

media (bachilleres) y superior, lo que muestra la pérdida de importancia de la educación como vehículo de movilidad social, cuando los logros educativos no están acompañados de procesos de cambio estructural de la economía y el mercado laboral. Entre los jóvenes, también se puede identificar a los denominados NI-NI quienes, al menos temporalmente, han sido marginados de los principales mecanismos de integración social como son la escuela y el trabajo. Uno de cada 10 jóvenes ni estudian ni trabajan, porque no encuentran oportunidades en las dos esferas, aunque estarían dispuestos para trabajar de inmediato si se les presentara una oportunidad.

TRABAJO Y CONDICIONES LABORALES

Como señala la OIT, tener empleos estables y socialmente protegidos como era habitual para las generaciones anteriores, es cada vez más difícil de conseguir para los jóvenes de hoy. En el país, solo cuatro de cada 10 jóvenes tienen una ocupación o buscan activamente un trabajo con tasas de desempleo que duplican el promedio general. La discontinuidad de sus trayectorias laborales, sus bajas

remuneraciones y la mayor precariedad de sus condiciones de trabajo, son rasgos comunes que les toca enfrentar, con severas consecuencias en términos de la disponibilidad de recursos económicos, autonomía, motivaciones y perspectivas.

Los jóvenes que pertenecen a los hogares más pobres, especialmente las mujeres, viven de forma todavía más severa la falta de trabajos de calidad porque se ocupan de manera desproporcionada como familiares no remunerados o realizan actividades por su cuenta, con un limitado acceso a recursos productivos complementarios al trabajo. Estas son muestras de la negación de sus derechos y de la profundidad de las desigualdades que enfrentan en el mundo del trabajo, a las que se suma la virtual ausencia de protección de salud, más aún cuando salen de la tutela familiar.

PODER, VOZ Y ACCIÓN COLECTIVA

La voz, la participación efectiva y la acción colectiva son tres dimensiones de los derechos humanos reconocidas como constitutivas del concepto de igualdad sustantiva y de justicia social. El informe Latinobarómetro de 2018¹,

1 www.latinobarómetro.org

entrega algunos indicadores sobre la visión de los jóvenes respecto a la realidad nacional y la suya propia, para comprender su relación con la política.

Los jóvenes ven un país que no está progresando —estancado o en retroceso—, en medio de una fuerte corrupción y falta de transparencia en todos los ámbitos de la gestión pública. Expresan su insatisfacción con el funcionamiento de la economía al que atribuyen la falta de empleo, la inestabilidad laboral, los bajos salarios y desprotección social (salud y pensiones) que, en su opinión son los problemas de primer orden para ellos y sus familias, agravados por el aumento de la violencia y la inseguridad públicas. La mayoría no espera cambios en el corto plazo, lo que refuerza la incertidumbre y la idea de un futuro incierto, sobre todo entre los más jóvenes y los que pertenecen a las clases medias más empobrecidas.

Muestran valores en favor de la democracia, pero reclaman condiciones que promuevan y renueven los espacios para la participación cotidiana en las decisiones que les afectan y la articulación de sus intereses. Advierten que el gobierno privilegia los intereses de grupos poderosos por encima de las demandas populares, de donde deriva su poca o ninguna confianza en la justicia, los partidos políticos, los espacios parlamentarios, el órgano electoral o los sindicatos, entre otras instituciones.

El autoritarismo, el abuso de poder, la injusticia, la impunidad, la explotación, la dominación que observan y sufren en múltiples formas en su vida cotidiana, los lleva a plantear



dudas sobre la vigencia de un régimen democrático real en el país. Este ha sido el trasfondo de una extraordinaria movilización juvenil que con “cantos y pititas” como una forma inédita de acción colectiva que, desde las calles, puso su impronta a una resistencia popular contra el fraude consumado por el MAS en las elecciones del 20 de octubre pasado.

El fraude, que recorrió todas las fases del proceso electoral, fue advertido oportunamente por la mayoría de la población que no dudaba en afirmar que este sería un desenlace esperado del proceso. Por eso, los jóvenes fueron los más interesados en velar por la transparencia en el conteo y transmisión de actas, exigiendo el respeto a su derecho político elemental de decidir a través del voto. Sin embargo, las cartas estaban echadas y el tribunal electoral continuó con su tarea asignada, acudiendo a todos los artilugios posibles. El sentimiento general resumido en la frase lanzada por una joven: “Nos quitaron la voz y ahora el voto”,

movilizó a cientos de miles de jóvenes en todas las ciudades del país, junto a una pluralidad de hombres y mujeres de todas las edades, grupos y sectores sociales que, defraudados una vez más en sus expectativas democráticas, se sumaron a una resistencia de alcance nacional y global en las calles y las redes sociales que puso en jaque a un gobierno que buscaba perpetuarse en el poder, hasta lograr su renuncia y el llamamiento a nuevas elecciones.

Las dificultades para participar plenamente en una diversidad de ámbitos como son los relativos a la educación, el mundo del trabajo, la participación política y la falta de oportunidades para plantearse el futuro con esperanza, constituyen dimensiones no monetarias de la pobreza juvenil, que hacen que el fenómeno sea más complejo y los retos sean mayores. La pregunta es en qué medida los jóvenes están dispuestos a construir espacios comunes para articular sus intereses y participar colectivamente en el ejercicio y conquista de sus derechos.

A MÁS DE 13 AÑOS DE GOBIERNO DEL MAS

Régimen depuesto instó a defender un modelo que genera desigualdades y pobreza

Los resultados de su gestión de casi 14 años, se han traducido en empleo de baja calidad e informalidad; desigualdades rurales, expansión capitalista y diferenciación social, y empleo rural y precariedad laboral.

Durante sus últimos días, el gobierno depuesto instó a sus adherentes a defender el 'proceso de cambio' presuntamente convertido en un modelo de crecimiento económico que promovió la redistribución de la riqueza, pese a que, en los hechos, sus políticas públicas han consolidado el patrón de acumulación primario-exportador.

"Como en otras economías capitalistas atrasadas y desiguales, en Bolivia se consolidó un patrón de inserción internacional primario-exportador", sostienen dos nuevas investigaciones del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA): Medición de la pobreza multidimensional Bolivia 2017 y Desigualdades y pobreza: una perspectiva multidimensional.

"Su dinámica contrasta con un proceso de desindustrialización y estancamiento de la producción orientada al mercado interno, con efectos sobre un limitado crecimiento del empleo y la mayor explotación del trabajo", señalan también sobre el problema de las desigualdades y la pobreza.



Al mismo tiempo que el régimen critica "el intento imperialista" por retomar el control del país, el equipo de investigadores reveló que, en realidad, la expansión de las relaciones capitalistas en Bolivia ha permeado todas las actividades económicas en medio de un persistente atraso tecnológico, profundizando la heterogeneidad estructural.

Entendida como la "coexistencia de sectores, ramas o actividades donde la productividad del trabajo es alta, con otras en que ésta es mucho

más baja", tal heterogeneidad potencia la precariedad laboral y otras desigualdades

Y es —junto con la acumulación y control del excedente, la explotación del trabajo y la desigualdad en la redistribución del ingreso— una de las cuatro causas de la pobreza en general, de acuerdo con las investigaciones, disponibles en cedla.org

"Estamos convencidos de que el enemigo de la unidad es el sistema capitalista", sentenció el martes 5 de noviembre el jefe de Estado, quien aseguró ante

miles de sus seguidores en la plaza San Francisco de La Paz que (los opositores y el imperio) pretenden dominar a los pueblos con la pobreza y la división.

Sin embargo, los resultados de su gestión de casi 14 años, se han traducido en empleo de baja calidad e informalidad; desigualdades rurales, expansión capitalista y diferenciación social, y empleo rural y precariedad laboral.

Ello incluye prácticas de subcontratación y tercerización que subordinan a los pequeños productores a la acumulación empresarial, e implican el aumento sostenido del excedente estructural de mano de obra, que no logra incorporarse a los sectores empresariales público y privado y que busca otras formas de inserción laboral para reproducir su fuerza de trabajo.

La consecuencia es perpetuar el desarrollo desigual y combinado de la economía nacional y la precarización del trabajo, señala por ejemplo el primero de los estudios

el crecimiento, la estabilidad de precios e incluso la reducción de la pobreza extrema.

Sin embargo, este modelo no consiguió transformar las condiciones estructurales para el progreso económico y social, ni para disminuir la distribución desigual de la riqueza y del ingreso nacional.

Si bien la disponibilidad de recursos fiscales permitió ampliar significativamente

la inversión pública, esta mantuvo un mayor peso relativo en infraestructura y en los sectores extractivos (megaproyectos y empresas dirigidas a hidrocarburos, minería) y, en forma restringida, tuvo como destino a los sectores productivos generadores de empleo (agricultura e industria manufacturera).

Asimismo, si bien aumentó la participación de la inversión y el gasto social con efectos en

CONTEXTO ECONÓMICO Y SOCIAL: LÓGICA RENTISTA

En un escenario internacional caracterizado por el aumento de la demanda y los precios de las materias primas, las políticas públicas impulsaron un modelo económico basado en una lógica rentista dirigida a la mayor explotación de los recursos naturales no renovables y a su exportación, con resultados positivos para el financiamiento de la inversión pública,



Diciembre de 2019

la mejora de algunos indicadores sociales, los recursos fueron insuficientes para lograr un verdadero impacto redistributivo.

Así, la política social ha continuado el enfoque de los programas de reducción de la pobreza impulsado por los organismos internacionales, priorizando las transferencias condicionadas con una mayor cobertura, pero manteniendo su carácter asistencial.

Mientras tanto, las políticas y acciones redistributivas por las que lucha la población

boliviana todavía son parte de una agenda pendiente.

De esta manera, la solución de los problemas vinculados con el empleo, los derechos laborales y la seguridad social (salud y pensiones), entre otros, se ha trasladado a la esfera del mercado, para favorecer la acumulación de capital en desmedro del bienestar de los trabajadores.

LA PASADA BONANZA

Hasta 2014 Bolivia disfrutó de una bonanza macroeconómica

sin precedentes, recuerda la investigación del CEDLA.

Este panorama comenzó a cambiar a partir de entonces por la caída de los precios internacionales de los hidrocarburos, minerales y commodities agroindustriales y por el bajo desempeño de otros sectores productivos, agravado por las políticas de apertura comercial y el contrabando que provocaron la desaceleración del crecimiento económico y redujeron la disponibilidad de ingresos fiscales.

A esto se suma la falta de inversiones para diversificar la economía, mejorar la productividad y potenciar la oferta exportable, lo que crea un ambiente de incertidumbre en el mediano plazo.

Entretanto, se ha seguido aplicando las mismas políticas de la etapa previa al auge exportador —relegando la inversión productiva y social—, mientras que la inversión pública y el gasto corriente se financian con el uso de las reservas internacionales y con un mayor endeudamiento externo, lo que postergará nuevamente las posibilidades de un desarrollo sostenible con equidad y una verdadera integración social y, por lo tanto, la reducción de la pobreza.

NUMEROS EN ROJO

- La economía se viene frenando desde 2014.
- En los últimos años, el crecimiento de la economía boliviana ha estado sostenido por un masivo programa de inversión pública, respaldado por una constante



pérdida de reservas internacionales y un creciente endeudamiento, además de un persistente déficit comercial.

- Las reservas internacionales cayeron a 7.433 millones de dólares, su nivel más bajo en 11 años, según cifras oficiales. Tomando en cuenta que en 2014 alcanzaban a 15.123 millones, éstas habrían caído a menos de la mitad en casi cinco años
- La reducción de los ingresos por hidrocarburos fue del 20,11% en el segundo trimestre de 2019, según el INE; la demanda de Argentina disminuyó en 28% y la de Brasil en 31%, país, este último, con el que no se ha firmado

la renovación del contrato de exportación. (aunque la Fundación Jubileo calificó de “crítico” el presente año por la caída del 30% en los volúmenes de gas exportados a Brasil en relación al 2018, así como una disminución del 9% de los volúmenes destinados a Argentina)

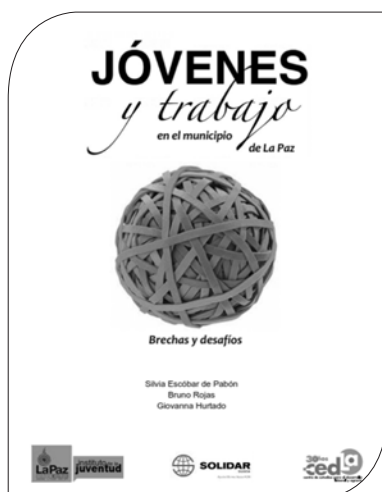
- Las cotizaciones internacionales de los minerales, particularmente del estaño, han tendido a la baja o mantienen valores inferiores a los de 2018.
- El Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmó que el crecimiento económico en el segundo trimestre de este año alcanzó un 3,13%,

menor al del primero (3,44%) y por debajo del 4,22% con que cerró el ejercicio 2018.

- La tasa anualizada del crecimiento del PBI (julio 2018-junio 2019) llegó al 3,38%, inferior al 4,5% necesario para conceder un segundo aguinaldo a los trabajadores en diciembre, un beneficio institucionalizado en 2013.
- La desaceleración del crecimiento del PIB en Bolivia es evidente desde 2013, cuando creció 6,8 por ciento, en 2014 un 5,5 por ciento, en 2015 un 4,9 por ciento, en 2016 disminuyó a 4,3 por ciento, en 2017 bajó al 4,2 por ciento, el 2018 casi repitió, con 4,22 por ciento".



Publicaciones del CEDLA



Disponibles en nuestra página web: www.cedla.org